



Senador Alejandro Kusanovic Glusevic
 Presidente de Comisión de Transporte y Telecomunicaciones

“Cable China-Chile: un proyecto incómodo”

Unidos, vínculo que Chile tradicionalmente ha cuidado por razones de interés nacional y de estabilidad en su política exterior.

La forma en que se ha promovido este proyecto contraviene principios básicos de prudencia. Avanzar sin un consenso político amplio ni una discusión pública rigurosa resulta imprudente. Más aún si consideramos que democracias consolidadas han restringido su cooperación tecnológica con China debido a los riesgos en ciberseguridad, confidencialidad y autonomía tecnológica.

Esto no es simple especulación. En 2017, el gobierno chino y empresas estratégicas de ese país invitaron al entonces candidato presidencial de izquierda a visitar instalaciones de una reconocida firma tecnológica. El gesto significó una señal de cercanía política del Partido Comunista Chino hacia un sector del espectro político chileno. Ese episodio no ha sido debidamente aclarado y hoy, en plena antelada

electoral, las suspicacias resurgen. Es deber del gobierno, también del gobierno chino, actuar con máxima cautela y evitar cualquier atisbo de injerencia extranjera en nuestras decisiones estratégicas, más aún en tiempos electorales.

Más inquietante aún son los antecedentes que indican reuniones entre autoridades chilenas y representantes chinos al margen de la Cancillería. De confirmarse, estaríamos frente a una omisión institucional grave. El ministro de RR.EE. debe no solo estar informado, sino ejercer un rol rector e indelegable en cualquier diálogo de carácter estratégico. Por ello, insto al canciller Alberto van Klaveren a abandonar la inercia y a defender el interés permanente de la República.

Chile debe proteger sus infraestructuras digitales. Los cables submarinos no son simples enlaces: son activos estratégicos que, dependiendo de quién los controle, permiten acceder a información sensible, ejercer

vigilancia, operar como sensores y proyectar poder. Por lo mismo, no sólo es relevante la tecnología implementada, sino quién la provee, bajo qué condiciones y en qué jurisdicción se resolverán los eventuales litigios. En un mundo tensionado entre China y Occidente, Chile no puede transformarse en terreno de disputa.

También es preocupante la exclusión de Isla de Pascua y del archipiélago Juan Fernández del trazado del cable Humboldt, proyecto originalmente pensado para conectarlos. ¿Se busca facilitar una ruta alternativa propuesta por China? De ser así, sería una decisión difícil de justificar. Estas islas son parte de nuestra soberanía oceánica y su omisión refleja una preocupante disposición a privilegiar intereses externos por sobre los nacionales. El gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner sobre la mesa el financiamiento para dejar conectadas las dos comunas de Chile insular, y por lo mismo debe como mínimo lograr que el cable Humboldt cuente con la factibilidad técnica para incluir tanto al poblado de Bahía

Cumberland (Juan Fernández), como a Hanga Roa (Isla de Pascua) durante el próximo gobierno. Cuesta entender que el Estado no destine los fondos hoy, sobretodo si solo en la licitación 5G inicial el Estado recaudó más de 450 millones de dólares.

Esto no significa marginar a China. Chile ha mostrado apertura al comercio y cooperación con múltiples actores, incluido el país asiático. Pero precisamente por su peso en nuestra economía, debemos exigir reciprocidad, transparencia y pleno respeto a nuestras normas e instituciones. Ningún proyecto de esta magnitud puede avanzar sin una base política sólida ni al margen del Estado.

Lo que parte mal, termina mal. Si China, o cualquier otra potencia, desea invertir en Chile, las puertas están abiertas, pero bajo reglas claras y con absoluto respeto a nuestra soberanía, alianzas históricas e institucionalidad democrática. La relación con Estados Unidos y con el mundo libre no puede verse debilitada por una diplomacia pasiva ni por decisiones carentes de visión estratégica.

Ha resurgido con fuerza una propuesta impulsada por China: la instalación de un cable submarino de fibra óptica que conecte directamente a ese país con Chile. Un proyecto ambicioso, cuyas implicancias geopolíticas y estratégicas exigen un debate abierto, responsable y de alto nivel. Lo que preocupa no es sólo su alcance técnico, sino el momento político en que se impulsa: los meses finales de un gobierno que ha mantenido una relación irresponsable con Estados